

Artículo

Control del espacio y control social en el Estado militar chileno

CONTROL OF SPACE AND SOCIAL CONTROL IN THE CHILEAN MILITARY STATE

Roberto Santana U.

Ex profesor de la Universidad de Toulouse-Le Mirail, Francia

Email: roberto.santana0792@orange.fr

Resumen

El texto que se presenta a continuación fue publicado por primera vez bajo el título *Contrôle de l'espace et contrôle social dans l'Etat militaire chilien*, en la Revista Hérodote, N° 5, enero - marzo, Paris, 1977. Por razones de seguridad personal, el escrito fue divulgado bajo el pseudónimo de Raúl Santibáñez.

En el artículo se expone que la dictadura militar chilena materializó un proyecto económico impulsado desde el exterior a partir de la ejecución de la guerra al *enemigo interno* y un ordenamiento estratégico de los pobres urbanos y rurales. La tercerización de la economía urbana y la contrarreforma agraria provocaron la generación de una masa de desempleados que puso en tensión la estabilidad del régimen de Pinochet. Los potenciales flujos migratorios dentro del país se observaron como posibles nichos de conflicto en diversos puntos del territorio, por lo que la Junta Militar se vio obligada a generar empleos precarios y ocupaciones militares en localidades específicas para controlar y situar problemas a sus límites espaciales tradicionales. Las actuaciones geopolíticas del Estado militar bajo un argumento de desarrollo capitalista, fragmentaron la sociedad chilena y anulaban cualquier intento de organización solidaria en los territorios¹.

Palabras Clave: dictadura, geopolítica, capitalismo, desempleo, fragmentación social

Abstract

The current text was published for the first time under the title *Contrôle de l'espace et contrôle social dans l'Etat militaire chilien*, in the Journal Hérodote, N°5, January- March, Paris, 1977. For personal security reasons, the author of this text was Raul Santibáñez, a pseudonym.

In this article it is explained that the Chilean dictatorship materialized an imposed foreign economic project, executed from the war to the *inner enemy*, and a strategic land use regulation to move poor population from urban and rural areas. The outsourcing of the urban economy and the counter

1 El resumen y palabras claves no estaban en el documento original. Estas fueron incorporadas por el Comité Editorial de la Revista Espacios. El sistema de citado que se presenta ha sido conservado tal y como fue presentado en el texto original.

reformation of the land reform caused the increment of a huge mass of unemployed, hindering the stability of the Pinochet's regime. The potential migratory flows in the country were observed as possible conflict niches in various points of the territory, and the military Junta was forced to generate precarious employment and military occupations in specific localities to control and put their concerns to traditional boundaries. The geopolitical perform of the military state under an argument of capitalist development, fragmented the Chilean society and annulled every attempt of supportive organization in territories.

Keywords: dictatorship, geopolitics, capitalism, unemployment, social fragmentation

Introducción

A tres años del golpe de Estado militar en Chile, muchos son los que se atreven todavía a ver en ello un acontecimiento puramente coyuntural y momentáneo. Al contrario, para un número escaso de gente, la llegada de los militares al poder constituye la instauración de las modalidades específicas de un nuevo ciclo del desarrollo capitalista en nuestro país, fase en la cual deberían entrar también otros países latinoamericanos.

Mi intención es llamar la atención sobre algunos aspectos reveladores de los rasgos y de la profundidad del verdadero tratamiento de choque al cual se encuentra sometida toda la sociedad chilena, la cual ya no es como antes.

Todo análisis de la dinámica del régimen militar chileno, de las modalidades específicas de la intervención de los militares en la sociedad y de los métodos concretos que utilizan, exige partir de la articulación entre estrategia del capitalismo internacional e iniciativas del nuevo Estado militar, cuyo principio orientador para uso interno es la seguridad nacional.

Conviene comenzar diciendo que los militares que se han apropiado del poder en Chile, pertenecen a cuerpos armados que no corresponden a la imagen característica de un ejército criollo tradicional a la latinoamericana, sino de un ejército modernizado al cual se habían incorporado ya, desde los años 60, los elementos que constituyen la esencia y la verdadera fuerza del sistema militar moderno: los instrumen-

tos, los conocimientos y los métodos de información, tratamiento y control, que por lo demás están en la base de las intervenciones sociopolíticas contemporáneas. Estos acervos, asociados a la doctrina militar moderna (seguridad nacional) y a la fuerza militar efectiva, habilitan o acuerdan a los nuevos dueños del poder una capacidad ilimitada de acción en los ámbitos más variados de la vida social, ya que se trata esta vez de una capacidad de acción no subordinada al poder civil, íntegra y no parcial, sobre el conjunto del cuerpo social.

Sin embargo el espacio sigue siendo el concepto fundamental de la profesión militar: el teatro de la guerra, el terreno topográfico, esos puntos, esas zonas, esas regiones donde se sitúan los conflictos, donde el enemigo (interno, esta vez) es fuerte o débil, donde debe ser eliminado el enemigo o en todo caso sometido. Para los militares, la guerra (esta vez, para ellos es una guerra interna) sigue como ocurría en el pasado, ganándose en puntos concretos, sobre espacios concretos, y no en las abstracciones de la economía o en la aplicación de normas jurídicas que, ellos lo saben bien, son relativos a las relaciones de poder en la sociedad.

En mi opinión, los militares chilenos realizan despliegues tácticos sobre el conjunto del territorio, los que son de gran envergadura y de graves consecuencias para el futuro, sin embargo esas acciones no pueden interpretarse de manera coherente sin definir lo que

está en juego en la guerra que siguen librando. Digo bien guerra, porque si bien los militares declararon suprimir el estado de guerra interno, en los hechos actúan permanentemente en el contexto técnico de tiempo de guerra. En su discurso de celebración del aniversario del golpe de Estado, el 11 de septiembre pasado², el general Pinochet confirmó que se trata de una guerra no convencional, puesto que el enemigo está dentro de la nación. El contexto de guerra interno es el ambiente en el cual los militares gozan de poderes absolutos que les permiten asumir la responsabilidad total de la sociedad: Estado, economía, cultura, etc. Para dominar al enemigo, fuera de la generalización de la violencia ya conocida, más de mil decretos leyes han echado las bases de una nueva legislación, la promulgación de los decretos haciéndose al ritmo que exigían las circunstancias. Las cuatro Actas Constitucionales decretadas en septiembre de 1976, vienen a colmar el vacío jurídico dejado por el abandono de la Constitución de 1925. Pero eso no hace más que institucionalizar o legalizar hechos de facto, en su mayor parte condenables.

Contrariamente a la opinión de algunos círculos militantes, los objetivos de esta guerra no son ciertamente ni el genocidio de la clase obrera y del pueblo chileno, ni la liquidación ciega de la economía del país. La guerra sirve para llevar a cabo una empresa gigantesca de reestructuración capitalista, con toda una serie de desestructuraciones económicas y de desplazamientos sociales.

El gobierno de Allende intentó asumir las contradicciones del capitalismo chileno poniendo en marcha un proyecto que constituía el rebasamiento del programa democristiano del gobierno que lo había precedido, y en teoría esto significaba que se creaban las condiciones para un capitalismo expansivo sobre

la base de un reforzamiento del Estado acumulador asociado a la parte dinámica del capitalismo privado chileno. El proyecto reformista de la Unidad Popular, en teoría, llegaba hasta allí, el socialismo era un objetivo alcanzable mediante una transición larga. En cualquier caso, Allende parece haber llegado demasiado tarde para salvar el modelo de acumulación existente y no encontró la respuesta nacional viable a las nuevas características del capitalismo internacional.

En realidad, la respuesta eficaz a las contradicciones resultantes del desarrollo capitalista en Chile una vez desencadenada la violencia social, no podía ser dada sino por los militares, capaces de terminar los conflictos allí donde los partidos políticos habían sido incapaces de modificar sus alianzas y de encontrar el consenso dejando libre curso a la violencia social. Los militares van a crearse al mismo tiempo un vasto espacio de maniobras.

Desde el día del golpe de estado, la Junta militar y la fracción de la burguesía más vinculada al capital extranjero han desencadenado, por medio del control financiero, una competencia feroz destinada a provocar una selección natural, destruyendo a todo un grupo de capitalistas antiguos o tradicionales, pero respetando a los empresarios modernizadores considerados como los más eficaces. Este proceso de selección sigue desarrollándose de manera implacable³ al mismo tiempo que se abre la economía chilena a los movimientos y tendencias más recientes de los capitales internacionales, borrando así los obstáculos opuestos anteriormente por los gobiernos populistas sucesivos.

Una de las señales más evidentes de los poderes excepcionales que el aparato militar se arroga sobre toda la sociedad se encuentra precisamente, en

2 Nota del editor: hace referencia al año 1976.

3 El Mercurio Internacional, 14-20 julio, 1975: "Es importante que los grupos que sufren la política económica no logren obtener privilegios, pues eso pone en peligro la experiencia global".

esta liquidación brutal de un sector entero de empresarios nacionales que no interesa a las grandes sociedades internacionalizadas, y también de algunas ramas más modernas que habían iniciado su desarrollo, como el automóvil, por ejemplo. El "estado de guerra permanente" permite al aparato militar reestructurar el capitalismo operando al interior de las fronteras con una eficacia desconocida para la democracia de masas.

Los estrategas de Washington reconocen, por su lado, que es precisamente bajo este estado de excepción que la eficacia militar puede llegar "a reducir el aparato del Estado, reasignar recursos a las actividades más productivas, lo cual implica inevitablemente una fase transitoria de quiebras y despidos, para llegar a continuación a un ritmo de desarrollo dinámico y sostenido cuyos beneficios se extiendan al conjunto del cuerpo social, incluidos los sectores más pobres"⁴.

Con esta dolorosa reestructuración, los militares desencadenan un verdadero cataclismo en la sociedad chilena, cuyo resultado más general se asemeja a una vuelta del capitalismo a sus orígenes clásicos, es decir, a una bipolarización extrema de las clases sociales. La primera de las víctimas es por cierto la clase obrera, pero proletariza también importantes

sectores de las capas medias urbanas. Por otra parte, el sector terciario tiende a reducirse enormemente provocando un aumento considerable de la cesantía y todo indica que esta situación va a empeorar, intensificándose así una crisis de carácter durable.

El enemigo principal de los militares en esta guerra interna resulta ser esta enorme masa de población sujeta a las graves tensiones desencadenadas por la reestructuración capitalista. De una cierta manera la sociedad se ha simplificado mucho y eso facilita la táctica de los militares. Se trata en primer lugar de aplastar toda resistencia a los "tratamientos de *shock*"⁵ sufridos por la economía y la sociedad, que ésta venga de la clase obrera o de las capas medias en curso de empobrecimiento.

Ahora bien, este enemigo está en todas partes, se dispersa en el territorio, es a menudo fluido y por lo mismo es necesario tratarlo de manera selectiva. Es necesario precisarlo, contarlo, caracterizarlo, localizarlo, circunscribirlo en el espacio, encuadrarlo para finalmente controlarlo mejor y neutralizarlo. En este artículo, examinaremos cómo los militares conducen sus operaciones en el campo, donde los problemas espaciales adquieren una importancia muy particular.

Los pobres del campo, Mac Namara y los militares

Henos aquí en presencia de una nueva estrategia para los pobres rurales, que no es de invención de los militares sino que forma parte de las estrategias internacionales. Para hacer frente a la mayor proletarización de las masas campesinas del Tercer Mundo,

nuevas políticas se están previendo a partir de 1973. Un poco por todas partes la reforma agraria había mostrado sus límites relativos al empleo, y los campos continúan siendo espacios de pobreza. En Nairobi, en este mismo año 1973, el Presidente del Ban-

4 El Mercurio Internacional, 2-8 mayo de 1976, refiriéndose a un trabajo del Centro de Estudios Estratégicos de Washington.

5 Es esta fórmula que el economista norteamericano Milton Friedmann, Premio Nobel de Economía (1976), ha aconsejado a la Junta militar (Conferencia del 26 de marzo de 1975, en la Fundación de Estudios Económicos, Santiago, Chile).

co Mundial, Robert Mac Namara, expuso las grandes líneas de una estrategia internacional que “permitirá dar el asalto a la pobreza en los campos”⁶.

Esta nueva estrategia tiende a superar los límites de la aplicación de la ideología Kennedy de la Alianza para el Progreso. Centrada en la reforma agraria, ella había acentuado las contradicciones en la agricultura, actuando como freno para el desarrollo del capitalismo, no había mejorado la suerte de los pequeños productores familiares y había agravado la subproletarización de los obreros agrícolas permanentes y de la mano de obra estacional. La nueva estrategia está entonces orientada principalmente a aquellos que quedaron al margen de los beneficios de las reformas.

Dos años más tarde, Mac Namara precisará el contenido de esta estrategia. Ella “tendrá por objetivo la extinción del pauperismo (...), no simplemente por medio de programas de asistencia a los necesitados o de una redistribución de los recursos nacionales ya insuficientes, sino más bien medidas concebidas expresamente para mejorar la productividad de los pobres”. Esta estrategia se funda, según su mentor, sobre la “utilización de un inmenso arsenal de posibilidades, hasta hoy no explotadas, que permitirá la reducción de la pobreza absoluta y de la pobreza relativa acelerando el crecimiento económico y ayudando directamente a los pobres a devenir más productivos”. Se trata de otorgar créditos a los países del Tercer Mundo para estimular proyectos que “asocien los elementos relevantes de diferentes sectores –rutas, electricidad, agua, educación, planificación familiar y nutrición– y los integren a los factores de

producción agrícola en intervenciones en favor del desarrollo interesando el conjunto de una región”. Una de las mayores preocupaciones del Banco Mundial tiene que ver con las técnicas agrícolas a emplear y Mac Namara insiste sobre la puesta a punto de “nuevas técnicas adaptadas a estos medios”⁷.

Volviendo a Chile, es sorprendente constatar que justo un mes después del golpe de estado, “bajo la recomendación especial del jefe del Estado y del Consejo de Ministros del desarrollo social (presidido por el general Leigh) la Oficina de Planificación Nacional comenzó el estudio de un Plan para la erradicación de la extrema pobreza”⁸. Según el mismo texto, dos etapas están previstas, la primera consistente en cartografiar el fenómeno con la utilización de ciertos indicadores socio económicos⁹. Se trata de saber cuántos pobres rurales y cuántos pobres urbanos existen y dónde ellos se encuentran¹⁰. Una vez el fenómeno cuantificado y localizado, será elaborado un Plan Nacional para la Erradicación de la Pobreza, que en lo esencial consiste en definir las regiones más deprimidas para lanzar allí una política de créditos convenientemente localizada.

Al nivel del discurso, es interesante constatar la similitud de los conceptos utilizados por Mac Namara y por los responsables del Atlas de la extrema pobreza: pobres rurales, pobres urbanos, extrema pobreza, etc. Es también cierto que ya antes de la publicación de este Atlas, comenzaron a llegar los primeros créditos del Banco Mundial destinados a los pequeños productores: 48,8 millones de dólares en 1974, 52,4 millones en 1975.

6 Mac Namara, Discurso al Consejo de Gobernadores del Banco Mundial, septiembre 1975, página 2.

7 Mac Namara, Op cit.

8 ODEPLAN, Atlas de los mapas de la extrema pobreza, marzo 1975.

9 Repartición de los pobres de cada comuna por edad y por nivel de instrucción.

10 El Atlas contiene los mapas de las 25 provincias, agrupadas en las nuevas 12 regiones del gobierno militar, a una escala de 1:1.650.000, y está prevista la confección de mapas similares al nivel comunal.

Según otro documento de la Junta Militar¹¹, “el programa de créditos para los pequeños agricultores favorecerá en el año 1975 cerca de 40.000 productores. El programa va a desarrollarse sobre cinco localidades: Curepto (Talca), Coelemu (Concepción), Nueva Imperial (Cautín), Quinchao (Chiloé) y Puerto Aguirre (Aysén). El financiamiento de estos “programas de desarrollo rural” proviene de los acuerdos pasados entre el Banco Mundial, el INDAP y los interesados mismos”¹².

Como se ve, la realidad de lo que puede concretarse está lejos de la retórica del discurso y devela el verdadero carácter de la nueva ayuda internacional. Su objetivo es el de subordinar la pequeña explotación campesina a las grandes empresas cooperativas promovidas y ayudadas en el período de la reforma agraria y hoy receptoras de financiamientos complementarios. Se constata, efectivamente, una intensa actividad de las llamadas cooperativas agrícolas que sirven de núcleo a un proceso activo de concentración capitalista. En tal sentido, hay que señalar la absorción, de más en más frecuente, de las cooperativas campesinas (de los pequeños agricultores) por las cooperativas agrícolas (de los agricultores capitalistas) en un proceso de creación de sociedades agropecuarias acogiendo toda clase de productores agrícolas. Este proceso de centralización cooperativa¹³ se efectúa tanto a nivel regional como nacional, dando como resultado una fuerte concentración económica, a tal punto que una Confederación nacional de cooperativas (COPAGRO) acaba de adquirir un banco desnacionalizado por la Junta Militar¹⁴.

Todo este proceso está vinculado íntimamente al nuevo papel asignado a la agricultura chilena en la nueva fase del capitalismo: por primera vez, desde hace cerca de cuarenta años, el sector se orienta de nuevo hacia la exportación, esta vez sobre la base de productos de cultivos intensivos que presentan ventajas comparativas y responden a una importante demanda en los países desarrollados.

Es en este nuevo marco de referencia que una parte de los pequeños productores familiares, por la ya conocida integración de los procesos agroalimentarios en los países desarrollados, comienza a producir “bajo contrato” en las condiciones fijadas por la industria. Otra parte de los pequeños productores, los que permanecieron al margen de la distribución de las tierras durante la reforma agraria, entran a formar parte de ese “inmenso arsenal de posibilidades aún no explotado”, y en el discurso, la “ayuda internacional les permitirá que se vuelvan más productivos”. Pero al lado de tales promesas, los créditos y la mayoría de los otros recursos, son controlados por los sectores dominantes de la agricultura chilena articulados paulatinamente al mercado mundial¹⁵.

Algunos ejemplos dan cuenta de esta aventura hacia la productividad de los pobres: el caso de Curepto, donde se prevé el desarrollo de nuevas líneas agroindustriales, o aquél de la precordillera de Talca y Linares, donde se estudia un extenso programa de desarrollo apícola con la instalación de quince mil cajones de colmenas modernas, o los programas de producción láctea de las provincias de Malleco y Cautín.

11 Presidencia de la República, Programas Ministeriales 1975, 1er marzo 1975, página 87.

12 El Mercurio, Revista del Campo, 13 julio 1976, página 33.

13 Este proceso se acompaña de acuerdos entre el INACAP (formación profesional) e IFICOOP (institución de financiamiento para las grandes cooperativas capitalistas).

14 Se trata del Banco O'Higgins. Nota del editor: Operativo desde 1957, el año 1997 se fusionó con el Banco de Santiago (funcionó hasta el año 2002).

15 El nuevo rol asignado a la agricultura va de par con la necesidad de industrializar los productos agrícolas. Este proceso ha comenzado ya con la participación de capitales nacionales (cooperativas agrícolas) y extranjeros. Las nuevas instalaciones de Malloa, Peumo, Quinta de Tilcoco lo atestiguan.

Hacia la concentración de la población flotante: las *villas rurales*

Los proyectos de desarrollo rural señalados se refieren a una reducida fracción de los pequeños productores, aquellos que poseen más tierra y un cierto capital. La Junta militar proyecta aplicar otras estrategias para la gran mayoría de los campesinos pobres minifundistas y para los proletarios rurales que no encuentran empleo en las grandes explotaciones agrícolas cuya intensificación y reducción consecuente de sus necesidades de mano de obra datan de las reformas agrarias de 1965-1973.

La estrategia para este problema de superpoblación rural es concebida por los militares en términos de control social y territorial. Como se indicó más arriba, la junta localizó y cuantificó a los pobres urbanos y rurales. En otro documento de 1974 aparecen las grandes líneas de las medidas que se aplicarán a “este millón de chilenos que constituyen seguramente el sector más pobre y el más olvidado de la nación”¹⁶.

Está previsto crear “mecanismos que permiten la transferencia de la propiedad entre minifundistas”¹⁷. Esto conducirá “a la reagrupación de los minifundios”¹⁸ y se puede imaginar que tal mecanismo sea un medio bastante eficaz de acelerar el proceso de diferenciación campesina: por una parte permitirá la formación de unidades agrícolas económicamente viables utilizando la mano de obra familiar gratuita y, por otra, la descampesinización de muchos otros.

Para los campesinos expulsados o *descampesinizados*, se crearán *villas rurales* y de esta manera, prosigue el texto, “las migraciones hacia las ciudades se

reducirán sustancialmente así como las tensiones sociales que causa la presión sobre la tierra”¹⁹.

¿Qué significa realmente esta concentración de los supernumerarios de la agricultura en estas villas?

Según los ideólogos de la Junta, la solución al problema de la miseria y del subempleo no puede buscarse exclusivamente en la agricultura, puesto que “las necesidades de modernizar la agricultura son inevitables y, por lo tanto, en la mayoría de los casos las necesidades de mano de obra por hectárea disminuirán”. Por otra parte, la solución a los problemas que crean estos excedentes de mano de obra “no puede considerarse seriamente en las condiciones de dispersión de la población rural”²⁰.

La Junta militar desea frenar los flujos migratorios hacia las ciudades y es muy consciente de las consecuencias de la modernización agrícola sobre el empleo. De ahí la necesidad de crear esas *villas*, “dónde se localizarán los servicios (...) y las industrias no intensivas en capital”. La Junta imagina también que es necesaria una infraestructura mínima para atraer los capitales y por eso “las zonas rurales deberán tener una infraestructura que las vuelvan atractivas a la inversión”²¹.

Se puede estar de acuerdo en que la ayuda internacional que busca la Junta puede servir para construir algunas instalaciones, escuelas o electrificación, pero afirmar que estos pequeños pueblos serán polos de atracción para las poblaciones del medio rural parece más que exagerado, a la luz del papel económico real que pueden jugar tales villas. De los textos

16 ODEPA, 1974, Ministerio de Agricultura, Políticas de desarrollo agrario y rural, página 31.

17 Se trata de crear un mecanismo de ahorro y crédito para facilitar la compraventa de parcelas.

18 ODEPA, Op. cit. 29.

19 ODEPA, Op. cit. 32.

20 ODEPA, Op. cit. 53-54.

21 ODEPLAN, 1976, Eficiencia económica para el desarrollo social, Plan Nacional Indicativo de Desarrollo 1976-1981, página 25.

oficiales y de los diarios, no se deducen otras posibilidades que el desarrollo de la artesanía, es decir, de pequeñas industrias domésticas cuya principal característica seguirá siendo la carencia de capital y de equipamiento. El gran esfuerzo, quedará siempre en las manos de los interesados. Después de haber hecho hincapié en la importancia de los servicios en estos pequeños centros, el diario El Mercurio resumía las informaciones del Ministerio del Interior en su edición internacional del 19-25 de septiembre de 1976: "el programa prevé sistemas de formación para los pobladores (habitantes) con el fin de que se sustituya la ayuda paternalista pasada por estimulantes permanentes para que la propia comunidad busque sus propios medios de desarrollo".

¿Qué medios podrán tener los candidatos a la concentración en estas *villas rurales*? Los mismos que tenían seguramente los habitantes de esos "pueblos de borrachos"²² que abundaban en el Chile central de finales del siglo XIX y que eran núcleos de cesantía formados por la afluencia de campesinos expulsados o marginalizados del trabajo en las haciendas, víctimas de la reconversión agrícola triguera.

¿Actualmente, quien va a encontrar lugar en las villas? Obviamente los cesantes rurales, el temporero, los campesinos expulsados de las áreas de minifundio por la concentración de la propiedad de la tierra; llegarán también los campesinos expulsados del sector reformado²³ que son discriminados a la hora de las asignaciones individuales de parcelas, así como todos los que han sido desfavorecidas por el *sistema de puntos* (notación de los candidatos a un título de tierra) que beneficia a ingenieros agrónomos, técnicos, veterinarios, y ex administradores capataces de las grandes explotaciones, todo ello en detrimento de los trabajadores²⁴.

Es precisamente la concentración de estos supernumerarios sin medios lo que se busca, y la política del gobierno militar no puede interpretarse sino como una voluntad deliberada de localizar el *ejército de reserva rural* (que no tiene ninguna oportunidad de emplearse en otra parte) para controlarla inicialmente, y ponerla luego a disposición de las empresas agroindustriales de exportación hacia las cuales fluyen ya capitales nacionales y extranjeros, en fin, para responder a sus futuras e hipotéticas necesidades de mano de obra.

El semi-militarización del "ejército de reserva"

Una de las señales más obvias de la crisis del capitalismo en Chile, a la que se hizo referencia anteriormente, era la incapacidad del sistema económico de crear empleos productivos. Para uno de los mejores años anteriores a 1970, es decir 1967, el desempleo alcanzó un 15,8% de los activos (incluyendo des-

empleo, subempleo y desempleo disfrazado)²⁵. La situación se vuelve más crítica aún en los años 1968 y 1969 correspondientes al último período de industrialización por sustitución de importaciones y al período culminante de la Reforma Agraria demócrata cristiana.

22 Así eran señalados, por los testimonios de la época, los numerosos núcleos de cesantía rural en Chile central.

23 El decreto-ley 208 de diciembre de 1973 estipula que aquellos que han ocupado por la violencia explotaciones expropiadas no tienen derecho a una parcela familiar.

24 Alrededor de 25.000 familias, es decir alrededor de 135.000 personas, según la Revista Mensaje, N° 253, octubre 1976.

25 Revista Ercilla, 20 octubre 1976.

Durante los años de gobierno de la Unidad Popular casi se alcanzó una situación de pleno empleo, hecho que no correspondía con un salto en el desarrollo de las fuerzas productivas y por lo mismo no podía mantenerse indefinidamente el poder adquisitivo de los trabajadores mejorado en 1971 (inversión de la tendencia al deterioro de los años 1968-1970), cuestión que hizo que la inflación aumentara de una manera extraordinaria entre 1972 y 1973.

Tras el golpe militar, el desempleo alcanzó entre 20 y 25% de los activos, cifra que se estabiliza en torno a un 20% a partir de 1974. De manera que, lo que

constituía ya un mal congénito de la economía chilena se ha empeorado llegando a alcanzar proporciones alarmantes, conocidas solamente durante la gran crisis de 1930²⁶. Un cuarto de los activos sin empleos es demasiado: por su sola existencia, tal *ejército de reserva* constituye un peligro evidente para la estabilidad del régimen.

La preocupación central del gobierno militar será pues de controlar esta enorme masa de ex empleados, ex obreros, artesanos empobrecidos y cesantes dispersos que se desplazan en búsqueda de un empleo.

¿Qué hacer?

Aplicar el sistema menos costoso posible. Aquel que permita, por una parte, garantizar la reproducción del *ejército de reserva* y, por otra, de someterlo efectivamente al control autoritario. Así surge el Plan de Empleo Mínimo (PEM)²⁷, el cual, sometido a un análisis rápido, muestra inmediatamente el escaso papel que la Junta le asigna en términos de producción económica. En efecto, según el DL 603, su objetivo consiste en "emplear a los cesantes en las tareas que son capaces de asumir en el marco de actividades que les asignen los municipios u otras autoridades". En la práctica, estos trabajos se reducen en las ciudades y pueblos a la limpieza de las calles, a la construcción de alcantarillados en las poblaciones y campamentos, a la prevención de las graves consecuencias de las lluvias invernales y, en una menor medida, al mantenimiento de la infraestructura pú-

blica y privada. En el campo, la principal ocupación es la repoblación forestal.

Primera observación: no es la productividad económica lo que interesa a los militares. Todas las actividades hasta ahora practicadas son esporádicas. El Plan de Empleo Mínimo conoce períodos de vacío, de inactividad, de tiempo muerto. Vista la imposibilidad de crear empleos productivos en una semejante coyuntura económica los objetivos del Plan no tienen nada que ver con la producción. Se trata de controlar a los cesantes: es necesario que estén allí donde se les dice, registrados (control diario), bajo supervigilancia de los municipios hoy dependientes del poder militar²⁸.

Segunda observación: hay un salario, si no fuera así ningún cesante participaría. Pero es un salario que

26 Se puede establecer un paralelo en cuanto a los niveles alcanzados por la inflación y la cesantía durante la crisis de 1929-1930 y la crisis actual. Es a partir de 1940 que las tasas respectivas empiezan a mejorar.

27 Decreto-ley 603 del 10 de agosto de 1974.

28 El decreto-ley 1289 del 12 de diciembre de 1975 transforma las municipalidades en un sector público de servicios, mucho más dependiente que antes del poder central.

no es tal, puesto que no está destinado a facilitar la reproducción de la fuerza de trabajo en las condiciones de la productividad industrial, sino solamente a reproducir el *ejército de reserva* en condiciones de semi-desempleo o de desempleo disfrazado. Al mismo tiempo, esta modalidad constituye un factor esencial para neutralizar la combatividad y las exigencias de los sectores de trabajadores vinculados aún con el aparato productivo. Podría tal vez asimilarse a una indemnización de desempleo, mínimo indispensable cuando éste alcanza el cuarto de los activos al nivel nacional. Este salario permanece obviamente por debajo de las necesidades mínimas, puesto que sólo representa menos del 80% del salario de subsistencia²⁹.

El Plan de Empleo Mínimo permite evitar la movilidad geográfica del *ejército de reserva*, los cesantes tienen la *feliz oportunidad* de permanecer en el municipio, o bien, en la localidad. Así todo el mundo sigue en el lugar donde se le conoce, se le registra y es permanentemente supervisado, formal o informalmente. Todo trabajo que exige desplazamiento geográfico de trabajadores se hace exclusivamente bajo control militar.

Realmente, los militares parecen haber estudiado bien la historia de nuestro siglo y entendido el carácter peligroso o explosivo de los flujos migratorios causados por las distintas crisis económicas, en particular por la crisis del salitre después de la Primera Guerra Mundial y por la gran crisis de 1929 - 1930. La migración de los mineros hacia las ciudades del centro del país se encuentra en la base de la centralización del movimiento obrero, de la misma manera que la vuelta de los mineros y otros obreros industriales a su medio rural de origen contribuyó un tanto al despertar político y a la organización de

las luchas reivindicativas en los campos. Al evitar los flujos de población, se evita la transmisión de las experiencias y las ideas, impidiéndose que algunas de ellas, de carácter local, sean difundidas con alcance más general.

Un último aspecto importante: el hecho de que el Plan de Empleo Mínimo esté controlado por los municipios y otras autoridades no significa simplemente que estas instancias coordinan la actividad de una multitud de obreros. Cada contingente de mano de obra está a la disposición permanente de la autoridad militar y puede ser militarizado si las circunstancias lo exigen. En la práctica, puede decirse que en algunas provincias del sur del país, la semi - militarización del Empleo Mínimo ya estaba institucionalizada. Tener que registrarse en el cuartel predeterminado todas las mañanas antes de ir a trabajar, estar bajo vigilancia militar durante la jornada de trabajo o durante el tiempo de transporte, todo eso constituyen formas de militarización que definen mejor los verdaderos objetivos del Empleo Mínimo. Estas modalidades no dejan de recordar los métodos franquistas de campos de concentración empleados después de la guerra civil, cuando millares de españoles, sobre todo los jóvenes, debieron pasar tres o cuatro años, y a veces más, en campos de retención. No eran en absoluto campos militares, puesto que no estaban sometidos a entrenamiento militar y obviamente no se les distribuían armas. Pero eso permitía conservar en la inactividad y el aislamiento los sectores potencialmente más peligrosos de España. Franco desplazó esta parte de la población, para instalarla en campos de concentración en los Pirineos o en otros lugares. El régimen militar chileno los inmoviliza allí donde los hombres viven y los militariza de una manera más flexible.

29 Según la carta enviada a Pinochet el 28 de mayo de 1976 por diez sindicalistas de la Confederación de Trabajadores, el 50% de los trabajadores chilenos vivían con el salario mínimo. Por su parte, la Iglesia Católica denuncia que el salario mínimo en Chile es un "salario de hambre" que no satisface las necesidades de alimentación de una familia. En junio de 1976 el Plan de Empleo Mínimo reclutaba 177.000 personas, lo que representa alrededor del tercio de los cesantes, si nos atenemos a la cifra oficial de 16,5% de cesantes en ese mes.

Territorios fronterizos: zonas de conflictos

Compartimentación del espacio y aislamiento social, tales son los métodos donde se entremezclan las concepciones geopolíticas clásicas y la doctrina de la Seguridad Nacional³⁰. Esta conjunción tiene por resultado crear una confusión entre zonas de frontera y zonas de conflictos. Sería mejor decir que se trata de zonas *ad hoc* cuyo significado principal es la implantación de un dispositivo militar o de una militarización territorial en un grado de intensidad elevado. La solución a los problemas de la gente y la cuestión del desarrollo no van a insertarse en los programas gubernamentales sino hasta después de establecido el control del territorio y de los hombres. En este sentido, los militares chilenos comenzaron sus acciones antes del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, más exactamente durante el invierno 1971, primer año del gobierno de Allende.

El territorio interior subandino de las provincias de Valdivia y Cautín se había transformado en zona de conflictos sociales tras la lucha de los trabajadores del sector forestal, de los obreros agrícolas y de los campesinos mapuches. El gobierno de Allende se vio obligado, bajo la presión de las masas, a expropiar grandes extensiones de tierras ricas en recursos forestales así como los aserraderos y las instalaciones industriales existentes en el departamento de Panguipulli. Se creó allí una empresa de Estado que tomó el nombre de Complejo Forestal de Panguipulli. A pesar de eso, ni el conflicto social ni el conflicto político llegaron a su término. Por un lado,

los grandes propietarios impugnaron las expropiaciones y por otro los trabajadores, conducidos principalmente por el MIR consideraban que Panguipulli era el centro de una vasta región a movilizar políticamente y a reorganizar desde el punto de vista productivo. Es a partir de entonces que se produjo la primera entrada en acción del ejército de tierra en su función de *gendarme social*, iniciando actividades de inteligencia con la pretensión de neutralizar un espacio pasado bajo control del *enemigo interno*.

La opinión pública, muy influida por los medios de comunicación de la oposición de derecha, no se informó prácticamente de una importante decisión tomada por el gobierno de Allende bajo la presión de los militares: a través del CONSUPSENA (Consejo Superior de la Seguridad Nacional) se decretó y se puso en práctica el Plan de "consolidación territorial para la zona - fronteriza de las provincias de Malleco, Cautín y Valdivia", dentro de las cuales se encontraban precisamente el Complejo Forestal de Panguipulli y tenían lugar las movilizaciones de los campesinos mapuches. El Gobierno se cuidó bien de no informar de esta decisión a los trabajadores y a la población de la zona. Así, mientras que las tensiones políticas subsistían en torno a la entrega o no de la gestión económica del Complejo maderero a los trabajadores, el ejército queda con las manos libres y comienza a establecer los dispositivos que van a permitirle, en el momento oportuno, controlar la situación.

30 La doctrina de la Seguridad Nacional fue sistematizada en América Latina por los militares brasileños de la Escuela Superior de Guerra creada en 1949 bajo la influencia del *Nacional War College* de los EEUU. Estos teóricos brasileños hicieron parte del 5° ejército americano durante la invasión de la Italia fascista. Uno de los principales teóricos ha sido Golbery de Couto e Silva, consejero de todos los gobiernos brasileños que se sucedieron después del golpe de Estado de 1964. Esta doctrina acuerda menos importancia al enemigo exterior que a las manifestaciones del enemigo interior (marxistas, guerrilla, subversión, descontento popular). El discurso de Pinochet del 11 de septiembre de 1976 es en este sentido muy explícito: "el marxismo es una agresión permanente al servicio del imperialismo soviético (...). Nos encontramos frente a una guerra no convencional (...), donde la invasión territorial es reemplazada por la intención de controlar los estados desde el interior: (...). El enemigo está en el interior de la nación".

Primera consecuencia del Plan: desplazamiento de fuerzas militares hacia la zona *amenazada*. De Santiago se envían dos regimientos al sur, uno a Valdivia y otro a la ciudad de Temuco. Ellos debían constituir las bases de apoyo de una red de pequeños cuarteles, dotados con unidades móviles, instalados estratégicamente para permitir el encerramiento de una extensa *zona - frontera*.

Segunda consecuencia: durante el año 1972 el ejército llegó a dominar el terreno en la región de Panguipulli; la movilidad de la población queda prácticamente bajo su control, los líderes de la movilización de trabajadores y campesinos son perseguidos o quedan bajo amenaza, los activistas urbanos son rechazados o acosados.

Tercera consecuencia: el ejército dispuso de todo su tiempo para desarrollar una actividad completa de inteligencia militar, para levantar planos del terreno y conocer los recursos locales (en 1971, no existían ni cartas topográficas ni fotografías aéreas de una gran parte de esa región) y se ponía en condiciones de controlar el espacio y la población.

El concepto de *zona de consolidación de fronteras* estaba en realidad lleno de ambigüedades: a) Los trazados de las fronteras con Argentina, a la latitud de las provincias de Valdivia, Cautín y Malleco, nunca habían sido motivo de litigio entre los dos países, ni durante la colonización ni durante la República; b) Tampoco se podía decir que era una zona de desplazamiento intenso de población entre los dos países, dada la falta de infraestructura física, excepto para los caminos de herradura utilizados para la trashu-

mancia del ganado, hacia los pastos de verano en los Andes; c) No existían tampoco problemas de defensa nacional o de invasiones de parte de los gendarmes argentinos, como en la provincia meridional de Aysén; d) El concepto mismo de espacio fronterizo es ambiguo: la amplitud considerada tiene un valor puramente convencional en un país como Chile donde la anchura media del territorio supera apenas los 150 km, de manera que la zona fronteriza podría englobar el territorio entero de una provincia.

La argumentación esgrimida para los efectos de la implantación de los dispositivos militares, en la *zona de frontera*, linda con lo ridículo pues en el caso que nos ocupa ella comenzaría en la depresión central de esas provincias, la frontera situándose a 50 - 60 km al Este. Realmente, lo que se delimitó a través del Plan de Consolidación de Fronteras es una zona socialmente conflictual, destinada a ser tratada como un caso particular en la estrategia militar, aislando a su población dentro de un dispositivo de inteligencia y de control social para cuyos efectos los militares se dotan de elementos operativos eficaces.

¿Previsión de guerra? Seguramente. Las acciones de *limpieza* comienzan sin tardar en Cautín y Valdivia a partir del golpe de estado y van a durar hasta los meses de otoño del año 1974. El cerco preparado anteriormente fue reforzado con el envío de fuertes contingentes militares; las operaciones terminan con los últimos grupos de autodefensa de los trabajadores forestales y campesinos mapuches. El carácter cruel de esta represión queda por escribirse.

Los espacios mapuches bajo “tratamiento especial”

Los militares se muestran hoy tan previsores como ayer y continúan la delimitación de espacios de importancia estratégica, conflictivos socialmente o potencialmente conflictivos. Los espacios ocupados por las minorías indígenas están en el centro de estas preocupaciones. El Instituto de Desarrollo Indígena³¹, concebido más bien como centro de estudios, tiene ahora por objetivo la “integración del indio a la agricultura comercial”. Más allá de los objetivos casi filantrópicos con que los medios de comunicación quieren presentarlo, sus funciones pasan a ser cada vez más de carácter geopolítico. La política indígena de los militares se articula con las preocupaciones de defensa de fronteras. Las tensiones sociales, las persecuciones y la movilidad geográfica de la población indígena son los factores considerados para convertir los territorios mapuches en zonas de *tratamiento especial*.

La gravedad de la situación socioeconómica de la población mapuche de las provincias de Bío-Bío, Malleco y Cautín se reveló en toda su amplitud durante los años del gobierno de la Unidad Popular, cuando estos campesinos comenzaron a luchar en masa por la recuperación de las tierras usurpadas por los entonces grandes propietarios. Así se revelaron a la opinión pública los acuciantes problemas sociales existentes en los territorios mapuches, la fuerte presión demográfica, el predominio de estructuras agrarias minifundistas, los ingresos de simple subsistencia. El gobierno de la Unidad Popular permitió la devolución a los indígenas de muchas de sus tierras usurpadas.

La política de la Junta militar consiste esencialmente en devolver, a los propietarios *legales*, las tierras re-

cuperadas por los mapuches durante los años 1969 - 1973³² y en transformar los minifundios en explotaciones familiares viables mediante una reconcentración de parcelas, proceso que necesariamente debe traducirse en la expulsión de mano de obra; ella tiende por lo mismo a empeorar la situación del campesinado indígena mapuche.

La crisis tradicional de la economía mapuche era la causa de importantes flujos de población, tanto hacia las ciudades cercanas como hacia la capital. Los mapuches se incorporaban así al contingente de los trabajadores urbanos con bajos salarios. A pesar de ello, un riguroso ahorro practicado por los emigrantes abastecía un flujo monetario que llegaba a las comunidades de origen y permitía la supervivencia de la pequeña propiedad indígena.

La enorme disponibilidad de mano de obra para una oferta de empleos muy reducida en las ciudades, no vuelve ya deseable este flujo migratorio: la población indígena debe ser mantenida *in situ*; la presión sobre el empleo no debe ser aumentada en las ciudades, ya en situación crítica.

No se conoce con precisión la amplitud de los dispositivos militares que cubren los sitios sensibles de la inmensa zona mapuche, pero los documentos oficiales hablan de las *acciones sociales* realizadas por el poder militar en estos hogares de extrema pobreza, en particular, sobre la costa de la provincia de Cautín. Todo ello se hace bajo el pretexto de integrar a “estos conciudadanos a la comunidad nacional”, objetivo loable, pero detrás está el objetivo principal que consiste en fijar la población mapuche y su crisis ya endémica a su espacio tradicional.

31 Creado en 1972 por el gobierno de Salvador Allende.

32 La recuperación de tierras la hicieron con el método de la *corrida de cercos* que consistía en desplazar los cercos de las grandes propiedades durante la noche. Después solicitaban la expropiación al gobierno.

Es fuerte la tentación de preguntarse si no estamos en presencia de la versión contemporánea de creación de *reducciones indígenas*, pero esta vez, al menos en el discurso se proporcionan algunos equipamientos de trabajo mínimos gracias a los empré-

stos del Banco Mundial, del Fondo Mundial para la Alimentación de las Naciones Unidas y de otras ayudas internacionales. En cualquier caso, los militares desearían *reducciones* bien disciplinadas, quizá hasta semi - militarizadas.

Las zonas fronterizas del norte y la “chilenización” de los aymaras

Otros espacios, también de interés geopolítico, figuran entre las preocupaciones de los militares: se trata de las zonas fronterizas del Norte. Aquí, la conjunción de factores es más compleja, y varios elementos entran en juego. En primer lugar la política *a favor* de los indígenas de la etnia aymara habitando el espacio de frontera septentrional y en desplazamiento constante entre los territorios limítrofes chileno, boliviano y peruano. La política militar viene a cuestionar la movilidad de esta población ya que la Junta se preocupa en primer lugar del problema de la nacionalidad (chilena) de estas poblaciones. *Chilenizar* la etnia aymara obliga en primer lugar a registrar, localizar y fijar a estas gentes. El Instituto de Desarrollo Indígena tiene en este sentido un papel importante que jugar³³. El objetivo declarado es, aquí también, productivista: “incorporar estas tierras de las comunidades a la agricultura comercial”³⁴. Eso implica la destrucción del modo de vida tradicional y por más que uno busque no aparecen los argumentos técnicos o económicos para justificar una tal orientación, sobre todo si se tiene en cuenta la escasa amplitud de la tierra cultivable y el peso minúsculo de la agricultura a escala de toda la región.

En realidad, otras consideraciones parecen estar en la base de estas pretendidas preocupaciones en favor de la agricultura comercial de los indígenas aymaras. Ya se vio como la noción de *espacio de frontera* es siempre ambigua manejada por los militares, puesto que alude a límites convencionales y por arte de la geopolítica puede traducirse naturalmente en zona de conflicto. Nuevamente estamos en presencia de las previsiones estratégicas, terreno en el cual los militares ya han demostrado su eficacia. Pero, ¿por qué una zona de conflicto en el Norte?

En el norte del país, los problemas derivados de la reestructuración capitalista parecen acumularse. Ha aumentado considerablemente el *ejército de reserva* con los miles de trabajadores despedidos de las minas³⁵ o cesantes a causa de la crisis de la rama automovilística en Arica, o de la crisis del pequeño comercio de importación del tiempo de los *puertos francos*, por obra y gracia de la transformación de todo el país en espacio franco, abierto a todas las mercancías. Hay que agregar también el desempleo provocado por el desmantelamiento del sector público. Una enorme masa de población está en busca de empleo en una región donde la diversidad de las

33 Se le ha creado una nueva delegación en Antofagasta.

34 ODEPA, Op.cit. 66-68, parte referente a políticas indigenistas.

35 El 15 de febrero de 1974, el número de afiliados a la Federación Nacional del Cobre licenciados de las minas era de 4 700 obreros y empleados. De la Federación Nacional minera el número de licenciados era de 20 000. Las provincias de Tarapacá y Atacama eran naturalmente las más afectadas con los despidos.

actividades económicas es escasa y donde la emigración está sometida a fuertes limitaciones, visto el contexto nacional de crisis³⁶.

En este contexto, el Gobierno militar prevé, por otro lado, ceder a Bolivia una banda del territorio de la provincia de Tarapacá para facilitar su acceso al mar y estudia también la posibilidad de acordar concesiones aduaneras a las mercancías brasileñas. Estas medidas son coherentes con la Doctrina de la Seguridad Nacional, uno de cuyos portavoces declaró: "Las fronteras geográficas entre los países americanos ya hicieron su tiempo". Hoy es el tiempo "en que la interdependencia deberá sustituirse a la independencia"³⁷.

Pero cuestiones como la cesión de territorios, o la internacionalización de una parte del territorio, son

sensiblemente delicadas y pueden ser la causa de conflictos, sobre todo si se tiene en cuenta que la población regional no puede esperar mucho de estas concesiones que se refieren principalmente al tráfico de mercancías exigido por los reajustes del capitalismo a escala de Sudamérica y cuyos beneficiarios son los capitales extranjeros y sus representantes locales.

Como se acaba de ver, varios factores pueden entrar en juego y esto permite pronosticar la aparición de situaciones conflictivas de envergadura. Ellas pueden constituir el gatillo para dar inicio a intensas operaciones de *limpieza en una zona de tratamiento especial*.

Un largo camino...

El estado militar chileno está embarcado en una serie de intervenciones de tipo geopolítico entre las cuales la más importante es la compartimentación del espacio que le permite ejercer un control social y limitar así la vivacidad de las solidaridades entre comunidades, categorías o grupos sociales y personas que anteriormente funcionaban con diferentes grados de coordinación. Una serie de espacios están sufriendo *tratamientos especiales*, y probablemente la tendencia sea a estabilizarlos durante un determinado período de tiempo: espacios de extrema pobreza, *villas* de concentración del *ejército de reserva*, zonas de *consolidación de fronteras*, de *tratamiento especial*, etc.

La sociedad chilena aparece extraordinariamente fragmentada, la gran mayoría de la población golpeada por la dictadura está extremadamente fraccionada en el espacio, constituyendo hasta cierto punto una *sociedad de islotes*. Los militares han logrado sin duda una victoria importante debilitando al *enemigo interno*, dividiendo el terreno sobre el cual se establecen los flujos y movimientos que conducen a las solidaridades sociales y esto constituye seguramente el factor decisivo de la *consolidación de la Junta militar*.

Pero el camino de la consolidación del nuevo esquema será largo, ya que la crisis del capitalismo en Chile es profunda. Los militares lo saben y las operaciones

36 El problema mayor para los desplazamientos es el costo de los pasajes para viajar pues el sólo medio de transporte público, el menos caro, fue eliminado en 1975 con la supresión de la línea ferroviaria del longitudinal del norte.

37 Revista América Press, junio de 1976.

a las cuales se libran son de gran envergadura, previstas para el medio y el largo plazo y rigurosamente coherentes con la lógica del capitalismo a la escala internacional. El estado militar vino a asumir una necesidad histórica del sistema, es decir la revitalización del capitalismo, y es allí donde está el principal reto de las luchas futuras.

En esas luchas, que serán luchas sociopolíticas, muchas concepciones antiguas en los medios progresistas, obviamente en crisis, deberán ser superadas. En efecto, aún imaginando la posibilidad de una revigorización de las luchas en el futuro, los nuevos proyectos populares deberán tener en cuenta que el aparato militar contemporáneo es capaz de controlar la sociedad mejor que nunca antes en la historia, e ineluctablemente en favor del capitalismo.

Además de su capacidad para castigar a la clase obrera y dismantelar las capas medias, el ejército muestra en Chile su eficacia incluso para estimular el desarrollo de nuevas capas burguesas, liquidar antiguas fracciones de la burguesía y reestructurar incluso la clase social dominante.

Para los opositores al estado militar impuesto por la fuerza, las cosas no son nada fáciles. Un problema, importante sobre cualquier otro deberá ser tenido en cuenta para la concepción de sus luchas futuras: la preparación de un nuevo terreno, en el sentido ideológico, social y territorial que sea tan actual como el de los militares.

Fecha de recepción: 30 de junio 2013
Fecha de aceptación: 30 de noviembre 2013